

INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL ELECCIONES GENERALES – HONDURAS 2025

ASOCIACIÓN ALEXANDRE PÉTION

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS GEOPOLÍTICO

INFORME FINAL DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

I. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LA MISIÓN

El Instituto de Investigación y Análisis Geopolítico Alexandre Pétion participó con 62 observadores internacionales acreditados como **Misión de Observación Electoral Internacional** en las **Elecciones Generales** celebradas en la República de Honduras el **30 de noviembre de 2025**, en virtud de la Carta de Entendimiento suscripta oportunamente con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García.

El presente Informe integra el **análisis preelectoral, electoral y postelectoral**, tomando en cuenta variables técnicas, jurídicas, institucionales y comunicacionales, y formula recomendaciones fundadas y orientadas a preservar la voluntad popular y la legitimidad democrática hondureña.

II. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL

La observación se desarrolló conforme a la **Constitución de la República de Honduras, la Ley Electoral y Leyes Relacionadas, el Reglamento de Observación Electoral y la Carta de Entendimiento** firmada con el CNE.

Dicha Carta confiere legitimidad plena a esta Misión para evaluar todas las fases del proceso electoral y elevar recomendaciones institucionales sin carácter vinculante, pero con valor técnico y democrático.

III. CONTEXTO PREELECTORAL

Esta Misión advirtió con antelación **debilidades estructurales del sistema electoral, riesgos en la gobernanza institucional y ausencia de garantías suficientes en materia de soberanía tecnológica**, auditorías y trazabilidad del voto.

IV. MARCO CONSTITUCIONAL DEL PROCESO ELECTORAL

La Constitución Política de la República de Honduras consagra el principio de soberanía popular, estableciendo que el poder emana del pueblo y se ejerce mediante el sufragio universal, libre, directo, igualitario y secreto. Asimismo, reconoce el derecho fundamental de la ciudadanía a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes legítimamente electos.

De dicho plexo constitucional se desprende que las elecciones no constituyen un mero procedimiento administrativo, sino un acto jurídico-político complejo, cuyo resultado sólo adquiere validez cuando se encuentra garantizada la autenticidad de la voluntad popular. En consecuencia, cualquier afectación grave a la transparencia, integridad, trazabilidad o certeza del proceso electoral compromete directamente la legitimidad constitucional del resultado.

La jurisprudencia constitucional comparada y los estándares interamericanos coinciden en que la certeza electoral es un presupuesto esencial del derecho al sufragio efectivo. La inexistencia de condiciones objetivas para verificar la correspondencia entre votos emitidos y resultados publicados configura una lesión directa al orden constitucional democrático.

V. PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO ELECTORAL APLICABLE

Del marco constitucional y legal hondureño se desprenden, entre otros, los siguientes principios rectores:

- a) **Principio de legalidad electoral:** toda actuación de los órganos electorales debe sujetarse estrictamente a la Constitución y a la Ley Electoral.
- b) **Principio de transparencia:** el proceso debe ser verificable por los actores políticos, la ciudadanía y los órganos de control.
- c) **Principio de certeza:** los resultados deben reflejar de manera fiel, comprobable y coherente la voluntad expresada en las urnas.
- d) **Principio de integridad del voto:** comprende la correcta emisión, custodia, transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados.

La vulneración concurrente de estos principios, de manera generalizada y no aislada, habilita la adopción de remedios extraordinarios previstos por el ordenamiento jurídico, entre ellos la **nulidad** del proceso electoral.

VI. MARCO LEGAL: LEY ELECTORAL Y LEYES RELACIONADAS

La Ley Electoral de Honduras y su legislación complementaria regulan de manera expresa:

- la organización y funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV);
- los mecanismos de escrutinio y transmisión de resultados;
- las medidas de seguridad del material electoral;
- los sistemas de contingencia;
- los procedimientos de impugnación y nulidad.

Dicho cuerpo normativo prevé la nulidad de actos electorales y del proceso cuando se verifiquen irregularidades graves que afecten la legalidad, transparencia o autenticidad del sufragio, especialmente cuando dichas irregularidades resulten determinantes para el resultado o impidan establecer con certeza la voluntad popular.

La legislación electoral hondureña no exige, para la procedencia de la nulidad, la acreditación de un resultado alternativo, sino la demostración objetiva de que el proceso se encuentra viciado de tal manera que sus resultados carecen de fiabilidad jurídica.

VII. OBSERVACIONES DE LA JORNADA ELECTORAL

Durante la jornada del 30 de noviembre se observaron dificultades logísticas, fallas operativas, deficiencias en la instalación de Juntas Receptoras de Votos (JRV) y obstáculos en la transmisión regular de actas, afectando el normal desarrollo del sufragio.

VIII. ANÁLISIS POSTELECTORAL Y SISTEMA TREP

Las fallas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) adquirieron carácter sistémico, comprometiendo la trazabilidad, integridad y coherencia de los resultados. Se verificaron inconsistencias entre actas físicas, bases de datos y divulgación pública.

IX. GOBERNANZA ELECTORAL Y TOMA DE DECISIONES

Se constató fragmentación interna en el órgano electoral, interrupciones en la toma colegiada de decisiones y falta de adopción oportuna de medidas correctivas, lo que agravó las deficiencias técnicas existentes.

X. PERCEPCIÓN PÚBLICA Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

La prolongada incertidumbre electoral y la circulación masiva de contenidos en redes sociales y medios digitales que cuestionan la integridad del proceso han incidido negativamente en la confianza ciudadana. La percepción social constituye un factor relevante en la valoración global de legitimidad democrática.

X. APLICACIÓN DE LOS SUPUESTOS LEGALES DE NULIDAD

Del análisis técnico, institucional y jurídico realizado por esta Misión se desprende que:

1. Se produjeron fallas estructurales en el sistema de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados, afectando la trazabilidad del voto.
2. Los mecanismos de contingencia previstos por la Ley Electoral no fueron activados de manera oportuna, completa y eficaz.
3. Existieron inconsistencias entre actas físicas, registros biométricos, bases de datos y resultados divulgados, sin posibilidad razonable de verificación integral.
4. La falta de gobernanza efectiva del órgano electoral impidió la corrección temprana de las irregularidades detectadas.

Estas circunstancias configuran un supuesto de nulidad de carácter estructural, en tanto no se encuentra comprometida únicamente la validez de determinadas mesas o actas, sino la confiabilidad global del proceso electoral.

XI. ESTÁNDAR DE DETERMINANCIA Y CERTEZA ELECTORAL

La exigencia legal de que las irregularidades sean determinantes no puede interpretarse de manera restrictiva ni aritmética. En contextos como el analizado, la determinancia se verifica cuando la magnitud y naturaleza de las irregularidades impiden afirmar, con un grado razonable de certeza, que los resultados proclamados reflejan la voluntad soberana del electorado.

En tal sentido, la imposibilidad de auditar integralmente el proceso constituye, por sí misma, un elemento determinante suficiente para habilitar la nulidad.

XII. COMPATIBILIDAD DE LA NULIDAD CON EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

La nulidad electoral no constituye una sanción política ni una medida excepcional arbitraria.

Por el contrario, es un instrumento jurídico previsto por el ordenamiento para preservar la democracia constitucional frente a procesos electorales viciados.

La reposición del proceso electoral, cuando se encuentra legal y técnicamente justificada, restablece el derecho del pueblo a elegir en condiciones auténticas, transparentes y confiables, y fortalece el sistema democrático.

XIII. CONCLUSIÓN

A la luz de la Constitución Política de la República de Honduras, de la Ley Electoral y la legislación relacionada, este Instituto concluye que el proceso electoral celebrado el 30 de noviembre de 2025 carece de las condiciones mínimas de validez constitucional y legal.

En consecuencia, la declaración de nulidad y la reposición del proceso electoral se presentan como el único remedio jurídico-institucional compatible con la protección efectiva de la soberanía popular, el orden constitucional y la legitimidad democrática.



Edgardo Hernán Cardo

Presidente

Asociación Alexandre Pétion

(INAP)